

PERIODO  
PRESIDENCIAL  
002538  
ARCHIVO

# **INFORME DE ANALISIS**

**(AL 12 DE ABRIL DE 1991)**

**MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA**

## A. ANALISIS POLITICO: LA ESTRATEGIA FRENTE AL TERRORISMO

El escenario que se ha ido configurando pasado el impacto inmediato del asesinato de Jaime Guzmán está fuertemente marcado por la impresión generalizada de que se llegó a un punto de inflexión respecto del tema terrorista y su tratamiento.

La derecha en su conjunto (RN y UDI) comparte la idea de que el gobierno se convenció, finalmente, de que su deber era tomar en serio el terrorismo y enfrentarlo en consecuencia: es decir, de que **existe ahora voluntad política** para combatirlo.

El gobierno, a su vez, asume que manejó un diagnóstico insuficiente del problema y da pruebas manifiestas y concretas de que está dispuesto a enfrentarlo con una nueva actitud: es decir, que asume su responsabilidad política y rectifica sus políticas.

La izquierda extraparlamentaria, por último, percibe con nitidez la nueva actitud del gobierno e incluso admite que ella se entiende en un contexto que le ha sido impuesto por el accionar de la ultraizquierda. Sin embargo, cree que la forma en que la nueva actitud del gobierno se empieza a manifestar operativamente incorpora mucho de la perspectiva que la derecha tiene respecto del problema y teme a las consecuencias de ello.

Por todo ello parece también claro que el aspecto más importante de la actual coyuntura estriba en los rasgos que la nueva política del gobierno ha adquirido y en el modo en que ella se va a ir operacionalizando en el futuro próximo.

Esa operacionalización está sometida al menos a tres tipos de tensiones distintas y de **intensidad** también diferente.

Primero, la que se produce por la **orientación** que se le confiera a la nueva política anti-terrorista. Un diseño con **acentos represivos, duros**, puede aproximarnos a la derecha y alejarnos de la izquierda extraparlamentaria. Por el contrario, un diseño con **acentos de flexibilidad** puede enajenarnos a la derecha y acercarnos a la izquierda extraparlamentaria y su mundo. Es evidente que la orientación de nuestra política depende de la valoración que se haga de cada uno de esos actores y sectores (a quién le damos mayor importancia). En el óptimo, habría que buscar una política que permitiera minimizar los riesgos que implica alienarse a uno y otro sector.

En segundo lugar, existe la tensión que se produce por el eje temporal: **corto plazo versus largo plazo**. Los actos terroristas nos fuerzan a reaccionar ante ellos y la naturaleza de esta reacción debe ser, **en lo inmediato y esencial**, represiva. Sin embargo, existe claridad en el gobierno de que, en el largo plazo, la reacción debe asumir contenidos de carácter más político-

cultural con el objeto de modificar las circunstancias sociales que **facilitan** la actividad terrorista. De cómo conjugar el carácter represivo del corto plazo con el carácter político-cultural del largo plazo emerge también una tensión.

Finalmente, el tercer tipo de tensión tiene un origen al interior de la coalición gobernante. Los miembros de la coalición comparten la idea de la necesidad de la respuesta policial para enfrentar el problema. Es decir: la necesidad de que se utilicen, perfeccionen y potencien, bajo mando civil, los organismos policiales normales que establece la Constitución, así como el aparato legal respectivo en el marco de un estado democrático y de Derecho.

Sin embargo, creemos percibir algunas diferencias respecto de la visión política en que esta respuesta policial se inserta. Por una parte, existiría una actitud que, junto a los aspectos represivos, postula el aislamiento absoluto de los grupos terroristas y aquellos sectores que expresan ambigüedad frente a los hechos terroristas o que, "si bien no los justifican, los entienden". Por otra parte, hay una visión que, sin descuidar los aspectos represivos, postula una mayor flexibilidad, si no hacia los grupos ultraizquierdista, sí hacia la izquierda extraparlamentaria. Existe aquí, entonces, una tercera fuente de donde surgen tensiones.

### **El análisis**

Desde el asesinato del senador Guzmán hasta este momento el gobierno ha perfilado una estrategia para enfrentar el problema terrorista que parece más decantada en relación con el Ejército y la derecha que en relación con la izquierda extraparlamentaria y el campo social en que ella influye.

A grandes rasgos, la estrategia político-policial del gobierno persigue (1) resistir la presión del Ejército, que se ha ejercido vía Pinochet, (2) separar aguas entre la derecha y el Ejército, evitando que aquélla se erija en articuladora de la presión de éste, y (3) ganar tiempo para desarrollar capacidades represivas y de inteligencia propias. Queremos insistir, no obstante, que en esta estrategia, tan clara hacia el Ejército y la derecha, no queda igualmente claro lo que debe hacerse con el sector de la izquierda extraparlamentaria.

### **La estrategia en relación con el Ejército**

Hay una doble dimensión tras las presiones del Ejército. Por una parte, acentuar su intervención en el rumbo de la política y de la transición. Por otra parte, sin embargo, el problema terrorista cataliza una inquietud natural, lógica o comprensible, de un

Ejército profesional que ve en el fenómeno una amenaza objetiva contra la seguridad del país.

Es interesante notar los efectos que produce la existencia de estos dos elementos cuando se las mira desde la perspectiva del conjunto de las Fuerzas Armadas y de Orden, puesto que si bien el segundo aspecto tiende a unirlos, el primero tiende, en cambio, a **distanciarlos**. No deja de llamar la atención que existan diagnósticos muy diferentes del problema entre el Ejército y Carabineros. Como se sabe, mientras aquél postula la tesis de un terrorismo bajo mando coordinado del FMR (A), el MIR militar y el Lautaro, los últimos caracterizan al terrorismo como descoordinado, circunscrito y de menor envergadura. Ambos, sí, coinciden en identificar el momento de la actividad terrorista como de "terrorismo selectivo". Esta diferencia es expresiva, a nuestro juicio, de la existencia de los dos aspectos ya señalados, contradictorios entre sí<sup>1</sup>.

En armonía con ese análisis, la estrategia gubernamental consistente en resistir las presiones del Ejército y potenciar la labor de Carabineros es plenamente válida. Aún más, el apoyo decidido a la intervención exclusiva de los organismos policiales en la lucha anti-terrorista, con prescindencia de los militares, fortalece en los primeros (y, sobre todo, en Carabineros) un compromiso con la transición y la democracia.

Sin embargo, la estrategia presenta el riesgo de descuidar lo que hemos denominado "inquietud objetiva" acerca de la seguridad del país, que es el punto donde se encuentran las ópticas y sensibilidades del Ejército y de las demás ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden. La estrategia debería complementarse con algún tipo de medidas que canalicen esa "inquietud".

### **La estrategia en relación con la derecha**

La impresión de que existe voluntad política por parte del gobierno de rectificar el diagnóstico previo acerca del terrorismo y tomar medidas coherentes con esa rectificación es, sin duda, un capital político que se ha ganado. Pero sería un error creer que se trata de un capital grande y ya **consolidado**. Por el contrario, es más bien reducido y frágil. La derecha (y, según nuestras fuentes, en

---

<sup>1</sup> También existen diagnósticos distintos entre Investigaciones y Carabineros. La policía civil, según lo manifestó el Prefecto Jefe del Area Metropolitana en Canal 11 el miércoles 10) no comparte el diagnóstico de Carabineros en cuanto a que los grupos de ultraizquierda están en una etapa de terrorismo selectivo. Para Investigaciones, siempre según aquella fuente, el terrorismo no estaría siquiera en una etapa selectiva.

especial la UDI) no están convencidas de que tal voluntad política vaya a ser estable<sup>2</sup>.

No creen que existan en el Gobierno condiciones para proyectar de manera permanente la imagen de autoridad necesaria y ejercerla con firmeza y decisión. Temen lo que describen como "política de bisagra" del gobierno. Es decir, giros en las políticas que se deciden. Por ejemplo, ahora se apoya y estimula la acción de Carabineros en la lucha anti-subversiva, pero qué ocurrirá cuando se produzca el primer e inevitable "exceso"?

Existe en la derecha un análisis grueso de la izquierda extraparlamentaria y se teme, ahora que los modelos de sociedad comunista han caído, a las fuerzas anárquicas. En esta perspectiva, cualquier puente que el gobierno establezca con la izquierda extraparlamentaria será evaluado como un signo de debilidad y tenderá, por tanto, a que la derecha se encapsule en su crítica. Quizás sería aconsejable regularizar y profundizar un intenso **intercambio de ideas** con el fin de que la derecha afine su análisis, lo matice y sea, por tanto, capaz de entender la lógica que eventualmente podría orientar el tratamiento que el gobierno dé a la izquierda extraparlamentaria.

La derecha también capta que se pueden estar activando grupos de ultraderecha o de ex miembros de organismos militares con fines de venganza o desestabilización. Y manifiesta sus aprensiones y temores a este respecto. No quieren, ni buscan un segundo El Salvador. Podría concluirse, entonces, que existe aquí un espacio de acuerdo para darle al tema un tratamiento de Estado. No es que en la derecha se piense que el gobierno quiera darle otro tratamiento. Lo que ella teme es que el Gobierno no pueda persistir en ese tratamiento en el tiempo.

Es indudable que los últimos acontecimientos le dan a la derecha, y sobre todo a la UDI, un nuevo poder de convocatoria que, según como evolucione el terrorismo, puede manifestarse fuertemente, ante una nueva situación terrorista de envergadura, en términos de una actitud mucho más confrontacional ante el Gobierno que la que tuvo a raíz del asesinato de Jaime Guzmán.

### **La estrategia en relación con la izquierda extra-parlamentaria**

La adopción de la estrategia político-policial respecto de las acciones de violencia política presenta una dificultad intrínseca en términos de su posibilidad de encontrar acogida en el mundo de la izquierda. La distinción entre una política que implique

---

<sup>2</sup> Sólo como dato: altos dirigentes de la UDI dicen haber recibido amenazas últimamente. Sin embargo, han pensado, al parecer, acudir directamente a Carabineros y no hacerlo a través del gobierno.

involucramiento militar, ajustada a la hipótesis de guerra subversiva, por un lado, y la de intervención policial en un marco democrático, por el otro, es difícil de asimilar para un mundo cultural que identificó por largos años la actividad policial como un elemento de la represión autoritaria.

Contribuye al recelo con que se recibe en el mundo de izquierda nuestro actual énfasis en el combate al terrorismo, el hecho de que durante la fase anterior no se crearon las condiciones para este giro. Nuestra postura original respecto del tema de la seguridad está directamente vinculada con la percepción hoy existente de que hemos efectuado un giro. Esta percepción ha causado un impacto positivo fuerte en la opinión pública y en la clase política. Sin embargo, éste no es el efecto que se ha producido en la izquierda extra-parlamentaria.

Primero, las acciones policiales proyectan una imagen de continuidad en relación con el régimen militar. Así, por ejemplo, la muerte de Antonioletti y los hechos de Coltauco son interpretados por estos sectores en la lógica de los "falsos enfrentamientos" que ocurrían bajo la dictadura.

En esencia, los procedimientos policiales están constituidos por los mismos hechos materiales y no cabe allí hacer variaciones, pero la acción gubernativa puede complementarse con el desarrollo de instituciones que refuercen el estado de Derecho. El proceso por el cual el mundo de izquierda adquiera confianza en la policía será paulatino, pero puede incentivarse de nuestra parte. Iniciativas como el Defensor del Pueblo pueden constituir una buena señal en el sentido de que se pretende ser drástico en la acción policial, pero enmarcándola en el estado de Derecho, a condición de que se la incorpore al discurso gubernamental al mismo nivel que los aumentos de facultades policiales y como aspecto crucial de nuestra política, y no se la reduzca al status de una mera iniciativa sectorial.

En la misma dirección apunta el trabajo con los organismos de derechos humanos, el cual ha dado resultados positivos. Por ejemplo, respecto de la prevención de la tortura a detenidos por delitos terroristas. Una condición para avanzar en la legitimación de una política policial respecto del terrorismo es desarrollar paralelamente los mecanismos que incentiven la confianza de todos los sectores de opinión en las instituciones policiales, y que reafirmen la voluntad del gobierno de resguardar los derechos básicos.

Otra dimensión que afecta la credibilidad en la izquierda de una política democrática de seguridad la constituye la semejanza de conceptos que fácilmente se produce entre la concepción militar de guerra subversiva con la que sustenta a la estrategia político-policial democrática. En este punto es aconsejable diferenciar acentuadamente nuestro marco conceptual respecto del que usan los militares y avanzar en transferir hacia Carabineros e

Investigaciones las conceptualización democrática del problema. Ello exige del Gobierno, y en particular del ente coordinador, un esfuerzo creativo por afirmar nuestros propios conceptos, eludiendo la fácil recurrencia al lenguaje militar. Sobre el particular, el trabajo policial ha sido rico en la creación de un lenguaje propio que permite salirse del campo de la guerra sin que ello implique un juicio de valor menos drástico del fenómeno, como por ejemplo la categoría de delito y delincuente terrorista desarrollada por la criminología moderna.

Lo anterior, también debe ser considerado en relación con el aislamiento de los grupos extremistas respecto de sus bases sociales, toda vez que al asignarles contenidos subversivos, ideológicos o políticos, se contribuye a su mitificación. Una adecuada conceptualización de estos grupos, distinta de las que manejan usualmente las concepciones militares de contra-insurgencia, podría permitir una mayor colaboración ciudadana en la tarea policial y su aislamiento social.

Lo que opera como trasfondo del problema que plantea el mundo de izquierda es la dificultad que enfrenta este sector del espectro político para romper con los remanentes de una política militarista vigente en la fase anterior. En especial, este problema afecta al Partido Comunista, en razón de su paternidad sobre el Frente.

Las restricciones de dicho partido para actuar en la dirección deseable son al menos dos: por un lado, el desarrollo de la concepción de vacío histórico, elaborada respecto de la crisis de 1973 y del golpe de Estado, que afirma que no debe volver a repetirse la situación de que el PC no cuente con capacidad propia de defensa, lo que se refleja muy prístinamente en la declaración de Corvalán; y, por otro lado, una efectiva alteración de la base social tradicional del PC, que los hace depender de segmentos marginales (jóvenes y pobladores) socializados en la política de rebelión popular, lo que dificulta para este partido un cambio sustancial de lenguaje. Esta inercia producida por este peculiar clientelismo político no afecta a otros partidos de la izquierda como es el caso del MIR político, el cual vivió precisamente un quiebre con el núcleo duro de su militancia y ahora busca su inserción en nuevas franjas sociales.

La lucha ideológica que se ha abierto respecto del tema del terrorismo puede ser desarrollada por el Gobierno a partir de una opción negativa, descalificando a los actores de la izquierda extraparlamentaria, o a partir de la divulgación de una concepción democrática de la seguridad, que sea capaz de sumarlos. Conviene tener presente que la persistencia de esta situación de ambigüedad o "confusionismo" ideológico tiene directa relación con las posibilidades de aislamiento social e ideológico del terrorismo de izquierda. No parece convincente afirmar que dichos grupos se encuentren totalmente aislados, por más que las encuestas reflejen un rechazo mayoritario a sus acciones. El hecho de que hayan tenido su origen en las actividades de resistencia de la década de los ochenta los dota aún de cierta legitimidad.

Por tanto, el proceso de ruptura con el terrorismo de izquierda por parte de la izquierda política, del mundo de los derechos humanos y de la iglesia popular, no está aún para nada terminado. Las posibilidades de éxito de la estrategia policial gubernamental dependen en gran medida de acelerar ese proceso de ruptura, para lo cual las dimensiones anotadas de lucha ideológica cobrarán relevancia en el mediano plazo, una vez pasada la urgencia de la actual fase de implementación de nuestra política.

Otro aspecto que hay que destacar es que la reducción de nuestras iniciativas al sólo plano represivo, sobre cuya necesidad hay amplio acuerdo, puede permitir el surgimiento de ideas y sentimientos que expliquen la acción terrorista por las condiciones sociales imperantes, generando con ello un ambigüedad que debilite la acción policial. No existe razón alguna para que este Gobierno, que ha recuperado la democracia, que ha reivindicado los derechos humanos, y que expresa un amplio sentimiento ciudadano, no desarrolle una concepción integral sobre el tema.

En esta dimensión de la estrategia político-policial le cabe un rol a la prensa y en especial a la prensa de izquierda. Existen hoy condiciones favorables para provocar una línea divisoria clara entre la izquierda social y extraparlamentaria y los grupos ultraizquierdistas.

Lo mismo vale para otras instituciones como la Iglesia y los organismos de derechos humanos, los cuales deben ser sumados a nuestra visión conceptual sobre del tema antiterrorista. No hacerlo favorece un clima de "confusionismo" que alimenta sospechas sobre la acción del gobierno y, por ende, sentimientos de "comprensión" o legitimidad hacia los grupos de extrema izquierda.

## B. EVALUACION DE OPINION PUBLICA: APOYO AL GOBIERNO Y TAREAS PENDIENTES<sup>1</sup>

### Evaluación de actores

La evaluación favorable de la **gestión del Presidente y del Gobierno** se ha fortalecido en el primer trimestre de 1991: un 52% manifiesta una opinión "buena" o "muy buena" del Presidente; igualmente, un 76,1% de la gente se declara "partidaria" del Gobierno, cifra superior a lo observado a fines del año pasado. Finalmente, la percepción de que el Gobierno está perdiendo apoyo disminuyó en 13 puntos porcentuales en relación al mes de Noviembre (23,9% en Marzo).

La **situación de la oposición**, en cambio, sigue mostrando signos de deterioro, pues desde Abril de 1990 que no ha podido ganar reconocimiento ni confianza. Si hace un año el 20% de los encuestados tenía una "buena" o "muy buena" impresión de la oposición, en la encuesta de Marzo ese porcentaje llega al 11,6%.

### Expectativas y orientaciones socio-económicas

En Marzo parecen consolidarse **expectativas favorables** respecto de la situación económica personal/familiar y nacional. Sólo un 4,2% de los entrevistados anticipa para dentro de seis meses una peor situación económica del país, mientras que un 3,1% tiene temores semejantes en relación a su propia situación económica. Tales porcentajes son ínfimos, y en alguna medida corresponden a un sector también reducido de personas (7,8%) que manifiestan desconfianza en el equipo económico.

Además de lo anterior, pareciera consolidarse la existencia de un "sentido común" socio-económico que ve en el Estado un canal fundamental de acceso a la ciudadanía económica. Desbordando diferencias ideológicas, hubo un 57,4% de respuestas favorables a la intervención directa del Estado en la creación de empresas, siendo los mayores de 50 años, las mujeres y las personas de estrato bajo, los sectores más propensos a favorecer este rol del Estado. En concordancia con esta visión, todos los segmentos, incluyendo el 61% de las personas de derecha o de estrato alto, prefirieron una modalidad de "crecimiento bajo y lento con bastante distribución".

---

<sup>1</sup>Este análisis se basa en una encuesta interna del Gobierno, realizada entre los días 28 de Marzo y 1 de Abril, en el Gran Santiago. Es, por lo tanto, anterior al asesinato de Jaime Guzmán.

## **La acción para favorecer a los sectores postergados**

La evaluación de las políticas sociales es un aspecto clave en la formación de la opinión sobre la gestión de Gobierno, especialmente en aquéllo que se refiere al valor social considerado como mas importante según la misma encuesta: "dar justicia social y atención a los más pobres".

En general, y en relación a este punto, si bien es cierto que se manifiesta confianza en la acción de Gobierno, la evaluación de la acción sectorial es más bien regular. La confianza se manifiesta en el 73,4% que dice que el Gobierno "está haciendo esfuerzos" por mejorar la situación de los más pobres; por su parte, la evaluación que se hace de los diversos sectores sociales es "buena" o "muy buena" en un 38,6% en salud, 39,1% en vivienda, y 47,8% en educación. Hay una brecha que, aparentemente, se cierra con la confianza en lo que el Gobierno pueda realizar en el tiempo por venir.

## **TEMAS ESPECIFICOS**

### **Delincuencia y Terrorismo**

La delincuencia y el terrorismo son vistos por la opinión pública como fenómenos diversos, asignándole en general mayor importancia al primero (no hay que olvidar que esta encuesta es anterior al asesinato de Jaime Guzmán). Mientras se estima que la delincuencia sólo se resolverá en el mediano o largo plazo, el terrorismo se percibe como un fenómeno mundial que afecta a todos los países modernos.

La acción de Gobierno es vista como más positiva en relación al tema "orden público/ delincuencia" que al "terrorismo", aunque, respecto del primero, entre Septiembre del año pasado y Marzo de este año ha habido una caída de casi 40 puntos porcentuales entre quienes estiman "buena" o "muy buena" la acción del Gobierno (23% en Marzo).

En término de las soluciones, la delincuencia es vista como un fenómeno social vinculado a la pobreza y a la estrechez de oportunidades, por lo que el énfasis debería estar puesto en la capacitación técnica de la juventud (62,5%) y la solución del problema de la pobreza (37,7%). Sólo un 22% se refiere a la necesidad de "mano dura" con los delincuentes. En términos análogos, y aunque sus causas son diversas a las de la delincuencia, el combate al terrorismo no implica algún tipo de militarización de la acción del Estado, ya que sólo el 11% de la población dejaría esa tarea en manos de los militares.

## **Relaciones Gobierno-Fuerzas Armadas**

En el mes de Marzo se observa el mayor deterioro de las relaciones del Gobierno con las Fuerzas Armadas. Estas últimas, por primera vez en este tipo de encuestas, aparecen con una nota promedio inferior a 3 (2,97). El mayor deterioro en estas relaciones se refiere a la Armada (el 60,9% las estimaba "buenas" o "muy buenas" en Noviembre, bajando al 30,1% en Marzo de este año) y el Ejército (el 36,4% las estimaba "malas" o "muy malas" en Noviembre, mientras que en Marzo ese porcentaje subió a 55,1%).

## **Informe Rettig**

Por otro lado, el Informe Rettig es visto por la opinión pública como un paso importante pero no definitivo para dar solución definitiva a la situación de los derechos humanos. Hay una mayoría importante que considera primordial para llegar a esa solución el juzgamiento, por parte de los Tribunales, de quienes sean responsables de violaciones a los derechos humanos (57,7%).

## C. ANALISIS ECONOMICO

Durante esta semana el ámbito económico ha permanecido estable, con persistencia de las expectativas positivas en relación a 1991. Subsiste, sin embargo, una discusión en torno a un eventual nuevo "sobrecalentamiento" de la economía.

A estas alturas, pareciera ser que los agentes económicos ya han absorbido el impacto del crimen del Senador Guzmán en relación a dichas expectativas. Por su parte, las señales del gobierno respecto de su decisión de combatir el terrorismo han reducido las inquietudes que pudieron haber existido sobre esta materia en la semana inmediatamente anterior. Finalmente, las conversaciones entre empresarios, trabajadores y gobierno respecto de temas económicos relevantes (salario mínimo, asignaciones, reajustes al sector pasivo), también reflejan la actual disposición positiva en torno a la búsqueda de acuerdos por parte de los agentes económicos. Pese a que en los sectores más vinculados al comercio exterior (exportadores, industrias sustitutivas de importaciones y áreas intensivas en materias primas importadas) aún subsiste algún grado de expectación por una eventual modificación en la política cambiaria, se sabe que en ningún caso el Banco Central va a adoptar medidas que introduzcan perturbaciones en el clima de optimismo que se vive.

Quizás porque los economistas saben que "nada es gratis", y que por lo tanto siempre existen nubarrones en el cielo económico, el fin del ajuste contractivo y el inicio de la reactivación ha generado el inicio de una **nueva polémica sobre la prioridad de dos objetivos permanentemente en conflicto: crecimiento y control de la inflación.**

Cuando se vivían los momentos más duros del proceso de ajuste de 1990 --que, en todo caso, no fueron tan duros como para terminar el año con recesión-- con tasas de interés superiores al 15% real anual, los analistas coincidían en que el ajuste había sido necesario pero polemizaban respecto a la aplicación casi exclusiva de una política monetaria contractiva (que eleva la tasa de interés, afectando principalmente a la actividad económica privada), sin recurrir a una política fiscal contractiva. Esta decisión estuvo basada en que el gobierno democrático no podía reducir el gasto público, exigiendo un esfuerzo adicional precisamente a los sectores más pobres, dada la postergación que éstos habían sufrido en años anteriores.

El otro tema en discusión era la profundidad que había adquirido el ajuste. A los pocos meses de iniciada la política contractiva, los sectores más sensibles a la tasa de interés (comercio, construcción e industria) comenzaron a presionar para que el Ministerio de Hacienda y el Banco Central relajaran el ajuste y se

iniciara así un proceso de reactivación. A fines de 1991, se consideró que los objetivos del ajuste estaban cumplidos<sup>1</sup>, pues se había recuperado la armonía entre crecimiento de la demanda y de la capacidad productiva, con lo cual se logró controlar las presiones sobre la balanza comercial y sobre los precios originadas por el exceso de demanda. El año 1990 terminó con un aceptable 2,1% de crecimiento y las autoridades pronosticaron que durante 1991 la economía chilena crecería entre 4 y 5%. A fines de 1990, la inmensa mayoría de los analistas coincidía en que, considerando los obstáculos enfrentados durante el año, la disyuntiva entre crecimiento y control inflacionario había sido resuelta exitosamente.

Al entrar a una nueva etapa, la de reactivación (reconocida por todos los sectores), la polémica entre crecimiento e inflación reaparece, pero en el escenario inverso. Según algunos economistas --quién comenzó, en forma seria, estos planteamientos fue Jorge Desormeaux, de la U. Católica, a lo que se agrega el editorial de la Revista de Economía y Administración de la Universidad de Chile-- la demanda agregada está creciendo a una tasa que supera las capacidades productivas de la economía, lo cual puede significar la necesidad de un nuevo ajuste a fines de 1991. Los antecedentes que se citan para avalar esta preocupación son el crecimiento proyectado en la inversión (6%), en las exportaciones (10%) y en el consumo (podría llegar a crecer sobre el 8% si persiste la tendencia alcista en las remuneraciones reales y en la ocupación). Como medida a aplicar, Desormeaux propone una reducción de los aranceles, que incentive las importaciones y de ese modo se desvíe hacia el sector externo parte del eventual exceso de demanda<sup>2</sup>. Una salida a través del sector externo sería viable porque el país goza de una sólida disponibilidad de reservas internacionales. Además, esta reducción de aranceles resultaría muy funcional a la suscripción de acuerdos bilaterales de comercio con economías de mayor desarrollo que la nuestra.

En todo caso, la preocupación por el eventual nuevo "recalentamiento de la economía" aún se mantiene reducida a los círculos académicos, dado que los agentes económicos --que, casi por definición, operan en el corto plazo-- recién comienzan a percibir la reactivación de la demanda agregada y aún se sienten con bastante capacidad productiva para satisfacerla. El indicador

---

<sup>1</sup>En realidad, el fin del ajuste debió postergarse a causa de las presiones inflacionarias de costos introducidas por la crisis petrolera en los meses de Septiembre y Octubre.

<sup>2</sup>Esta medida tiene sus costos, principalmente el descontento que generará entre los sectores que sustituyen importaciones y una posible reducción en la recaudación tributaria, aunque este efecto sería amortiguado porque existiría un mayor volumen de importaciones, pagando un arancel menor.

clásico para medir un exceso de demanda sobre la economía es la tasa de inflación y lo cierto es que esta se mantiene en niveles muy aceptables, considerando la experiencia chilena y las metas para 1991.

La variación estimada del IPC para Abril indicada por el Banco Central a través de sus tasas nominales y reales de interés, llega a 1,4%. Esta variación supera las expectativas que los agentes económicos se habían formado durante los diez primeros días del mes, e incluso algunos analistas desconfían de dicho pronóstico, pensando que puede ser un manejo de expectativas por parte del instituto emisor.

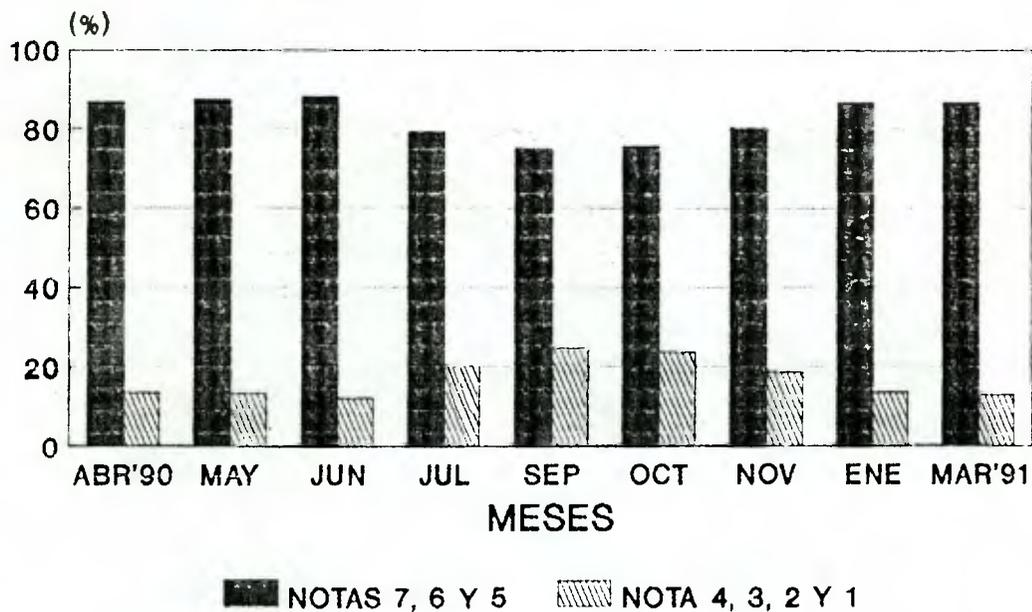
Lo cierto es que el Banco Central realmente cree que la inflación bordeará el 1,4% en Abril. Más aún, fuentes muy confiables señalan que el IPC de este mes podría llegar a 1,5 o 1,6%. Esta tasa en ningún caso debe interpretarse como un rebrote de la inflación ya que, por una parte, se compara favorablemente con el 1,8% observado en igual mes de 1990 (por lo tanto el acumulado en los últimos doce meses sigue bajando, ubicándose alrededor de 22,8%) y, por otra, está levemente influido por un perfeccionamiento metodológico del índice<sup>3</sup>. Esta modificación trasladó una pequeña parte de la inflación (la de Servicios de Salud) desde Marzo a Abril, lo que obliga a ser cuidadoso con las comparaciones de años anteriores. Algo similar debería ocurrir con los meses siguientes, pero el efecto real de dicho cambio metodológico se irá disipando a través del tiempo.

**En resumen, los pronósticos sobre un eventual nuevo "recalentamiento" de la economía deberían ser escuchados con atención pues se basan en datos serios.** Sin embargo, también conviene tener en cuenta que existen salidas técnicas muy viables que no comprometen ni el crecimiento ni la estabilidad durante 1991-1992. Además, los productores se muestran optimistas respecto de su capacidad para satisfacer la demanda; por su parte, los indicadores de corto plazo (IPC) indican que aún hay tiempo para tomar medidas en caso de presiones inflacionarias inesperadas. Por último, el manejo de la macroeconomía siempre requiere de algún grado de "sintonía fina" porque permanentemente hay disyuntivas entre crecimiento e inflación que impiden exagerar el logro de sólo uno de estos objetivos.

---

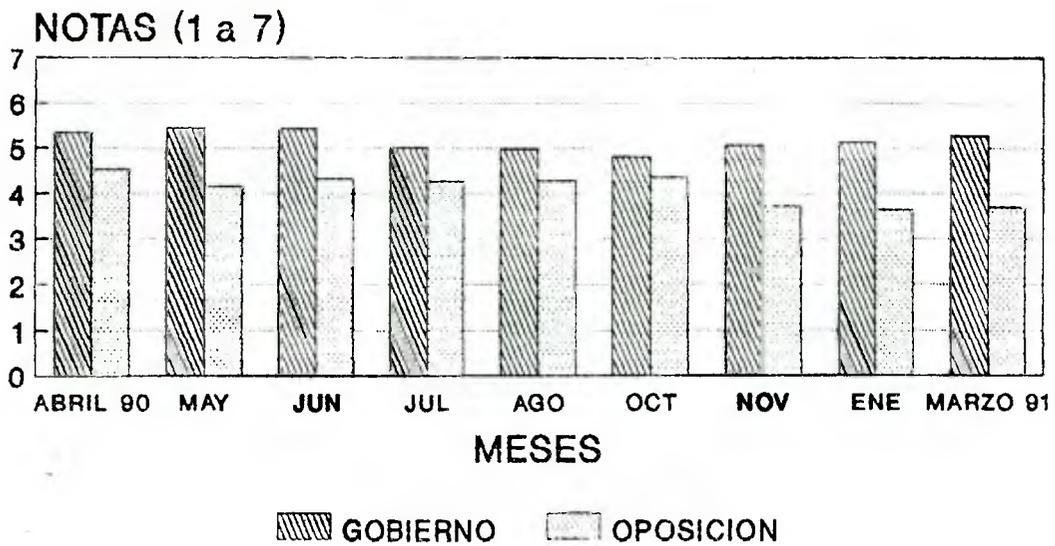
<sup>3</sup>Hasta Diciembre de 1990 se encuestaba trimestralmente los Arriendos y los servicios de Salud y Educación en los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre. A partir de Marzo de 1991, sólo Educación se seguirá encuestando en el esquema anterior; Salud se encuestará trimestralmente en Abril, Julio, Octubre y Enero; y Arriendos, en Mayo, Agosto, Noviembre y Febrero.

# MEDIDA DEL APOYO AL PRESIDENTE (ABRIL 1990 - MARZO 1991)



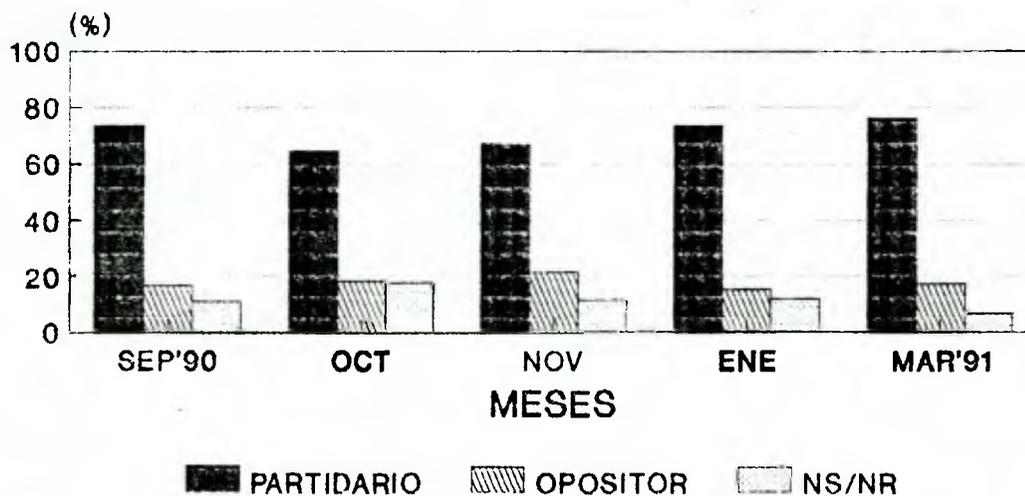
Div. de Estudios  
Secretaría Gral. de la Presidencia  
(SGG, para el Gran Santiago)

# CALIFICACION PROMEDIO AL GOBIERNO Y A LA OPOSICION (ABRIL 1990 - MARZO 1991)



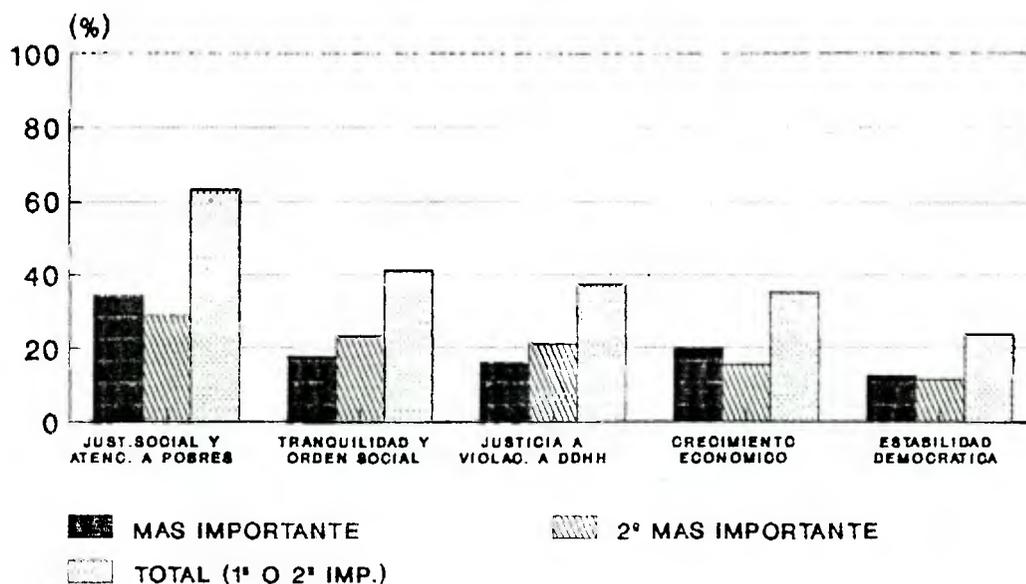
Div. de Estudios  
Secretaría Gral. de la Presidencia  
(SGG, para el Gran Santiago)

# SE CONSIDERA USTED PARTIDARIO U OPOSITOR (AGOSTO 1990 - MARZO 1991)



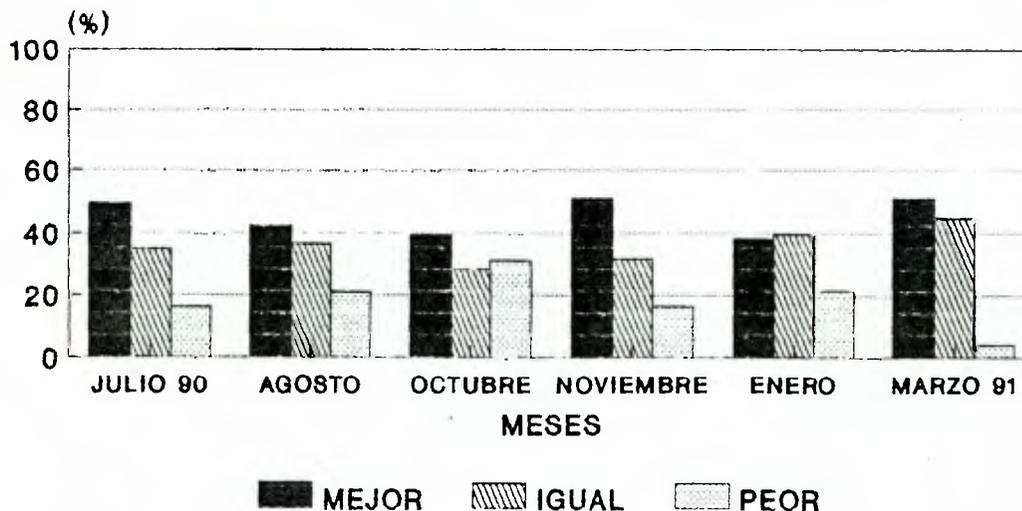
Div. de Estudios  
Secretaría Gral. de la Presidencia  
(SGG, para el Gran Santiago)

# VALORES SOCIALES MAS IMPORTANTES (MARZO 1991)



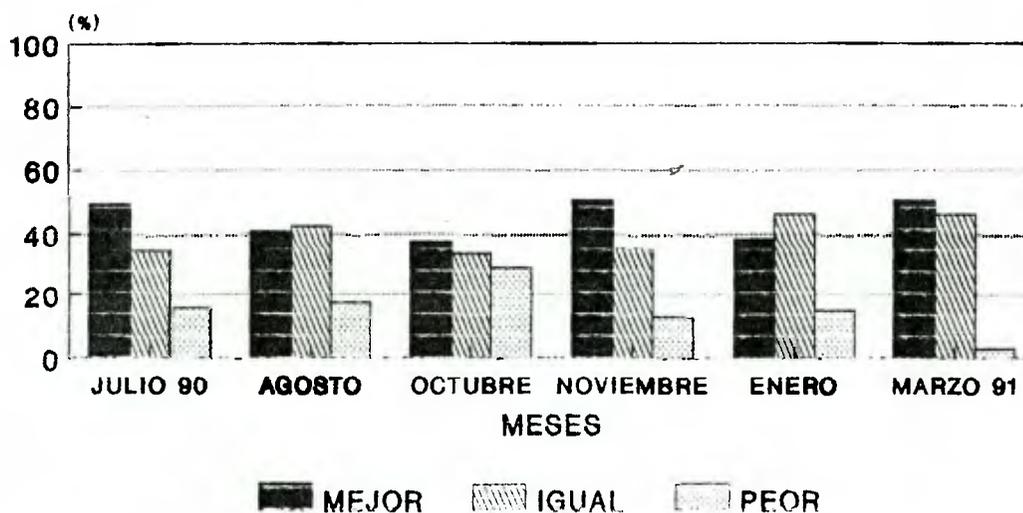
Div. de Estudios  
Secretaría Gral. de la Presidencia  
(SGG, para el Gran Santiago)

# SITUACION ECONOMICA DEL PAIS DENTRO DE SEIS MESES (JULIO 1990 - MARZO 1991)



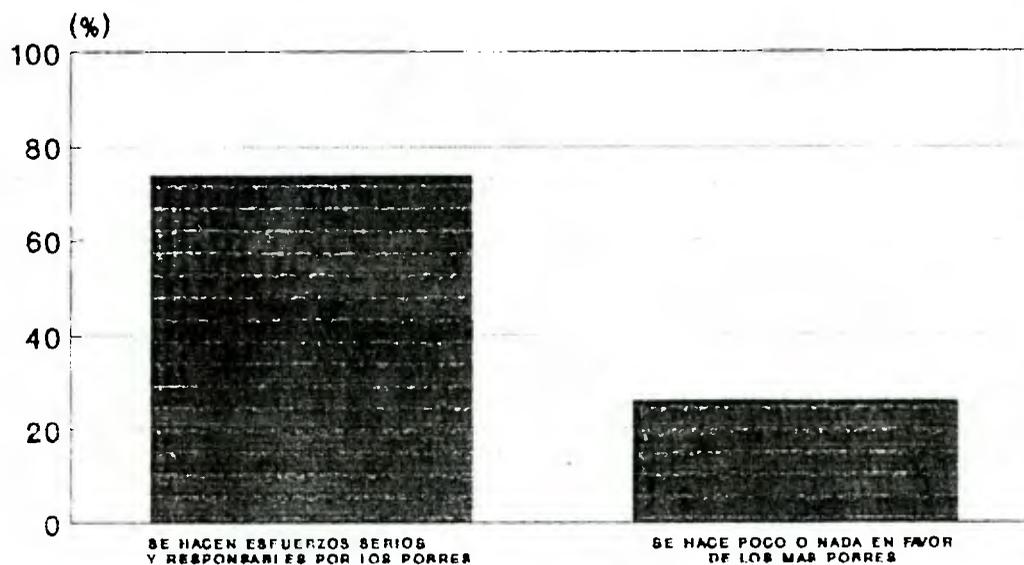
Div. de Estudios  
Secretaría Gral. de la Presidencia  
(CIS/TIME, Gran Santiago)

# SITUACION ECONOMICA PERSONAL DENTRO DE SEIS MESES (JULIO 1990 - MARZO 1991)



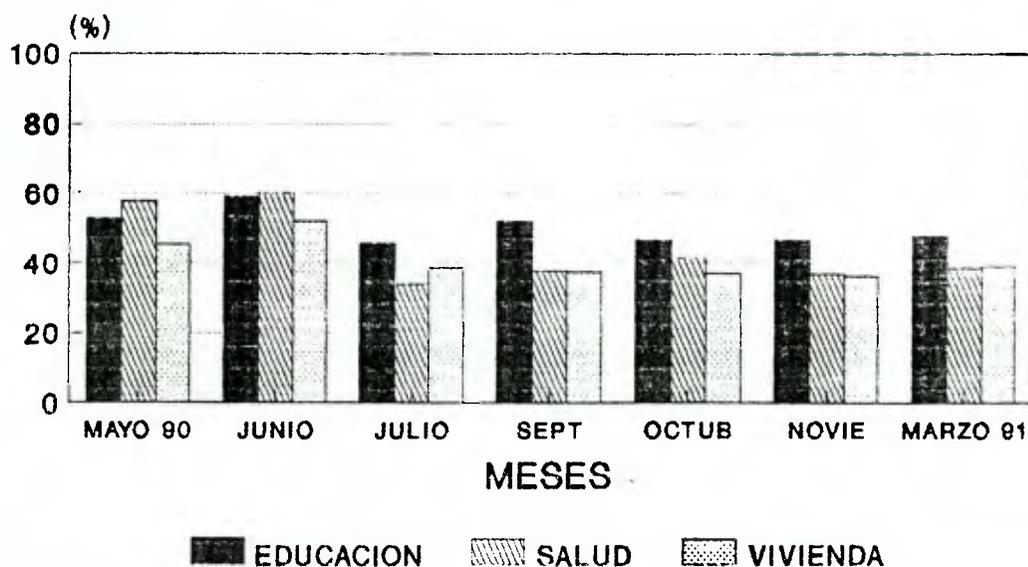
Div. de Estudios  
Secretaría Gral. de la Presidencia  
(CIS/TIME, Gran Santiago)

# ESTIMACION DE LOS ESFUERZOS DEL GOBIERNO EN FAVOR DE LOS POBRES (MARZO 1991)



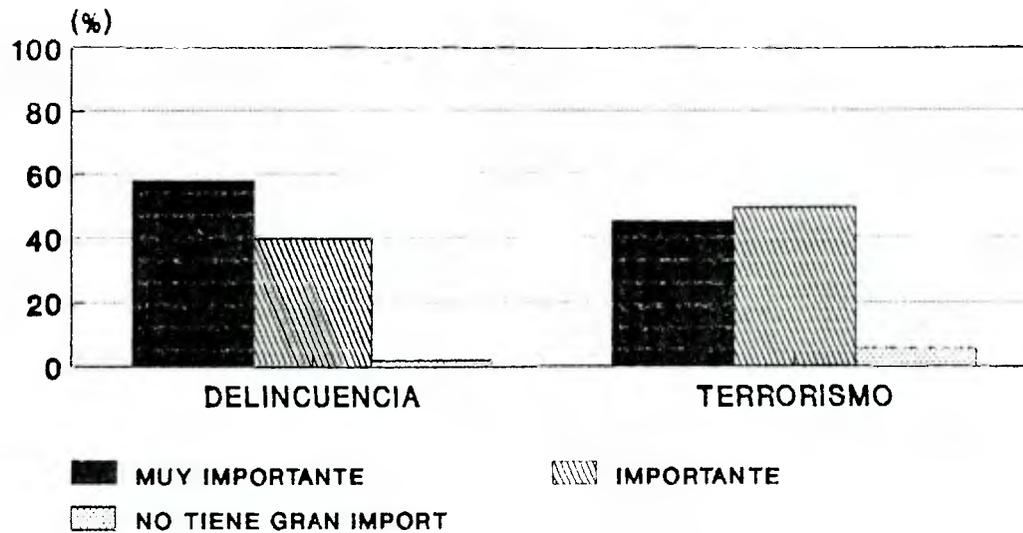
Div. de Estudios  
Secretaría Gral. de la Presidencia  
(SGG, para el Gran Santiago)

# PORCENTAJE DE PERSONAS QUE EVALUAN "BIEN" O "MUY BIEN" AL GOBIERNO (MAYO 1990 - MARZO 1991)



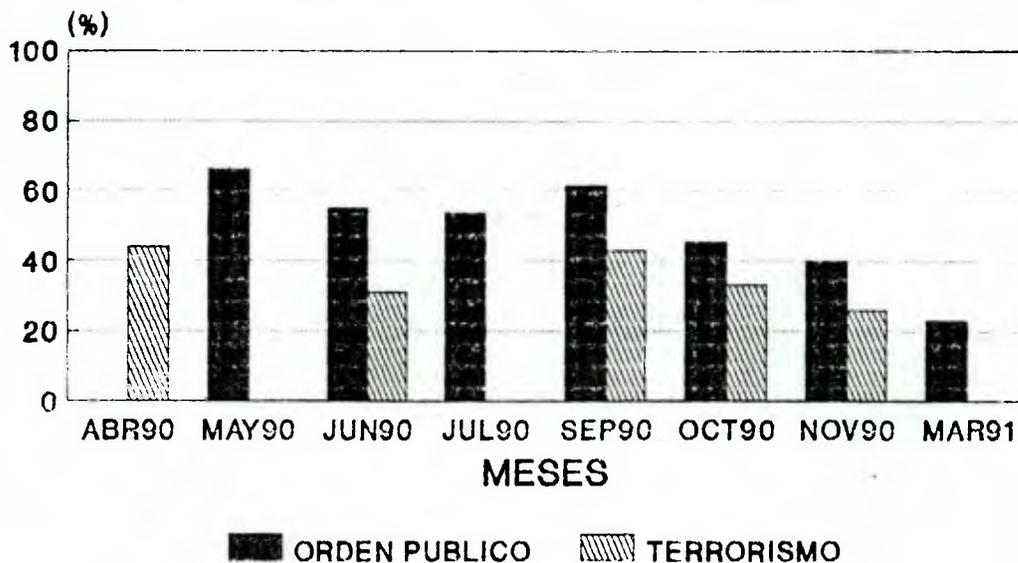
Div. de Estudios  
Secretaría Gral. de la Presidencia  
(SGG, para el Gran Santiago)

# IMPORTANCIA DE LA DELINCUENCIA Y DEL TERRORISMO EN EL PAIS (MARZO 1991)



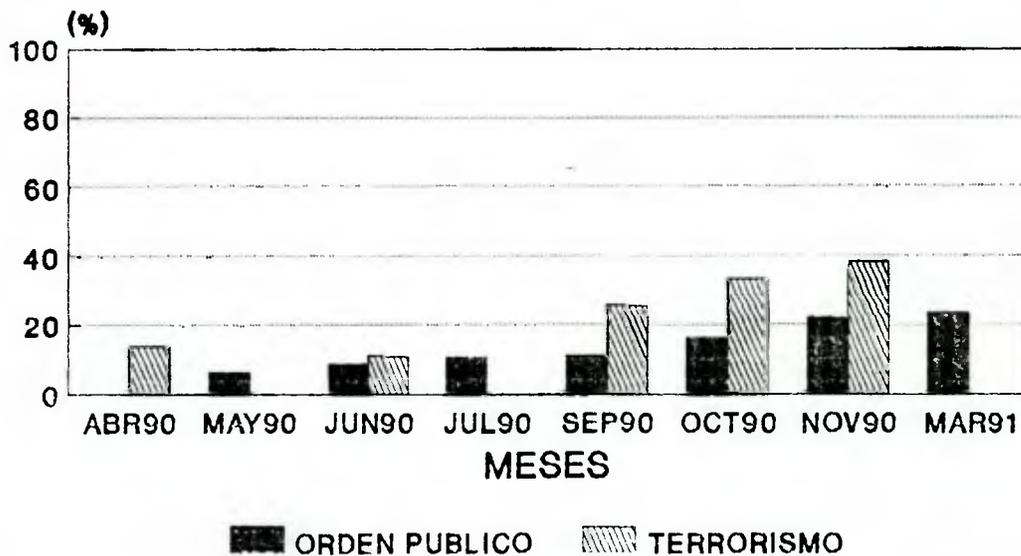
Div. de Estudios  
Secretaría Gral. de la Presidencia  
(TIME, Gran Santiago)

**PORCENTAJE DE PERSONAS QUE EVALUAN  
"BIEN" O "MUY BIEN" AL GOBIERNO  
(ABRIL 1990 - MARZO 1991)**



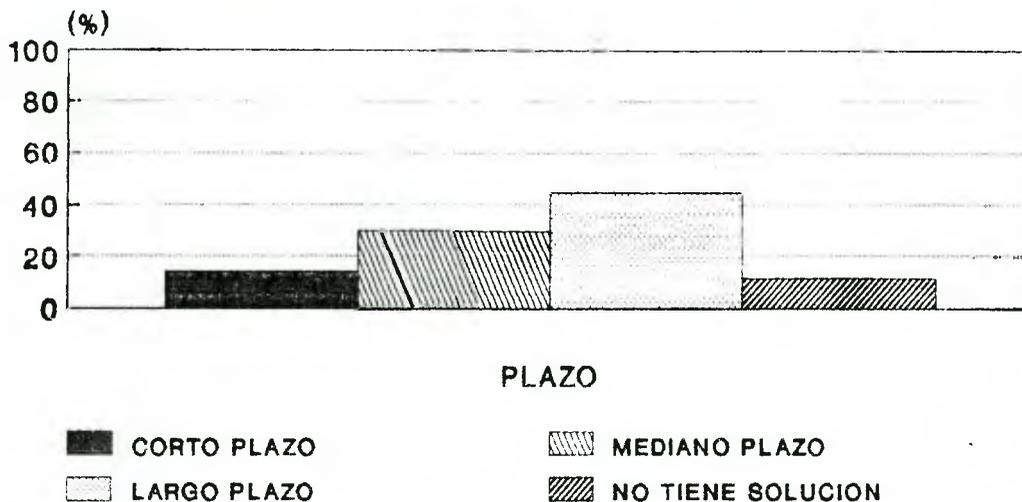
Div. de Estudios  
Secretaría Gral. de la Presidencia  
(SGG, para el Gran Santiago)

**PORCENTAJE DE PERSONAS QUE EVALUAN  
"MAL" O "MUY MAL" AL GOBIERNO  
(ABRIL 1990 - MARZO 1991)**



Div. de Estudios  
Secretaría Gral. de la Presidencia  
(SGG, para el Gran Santiago)

# TIEMPO NECESARIO PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA (MARZO 1991)



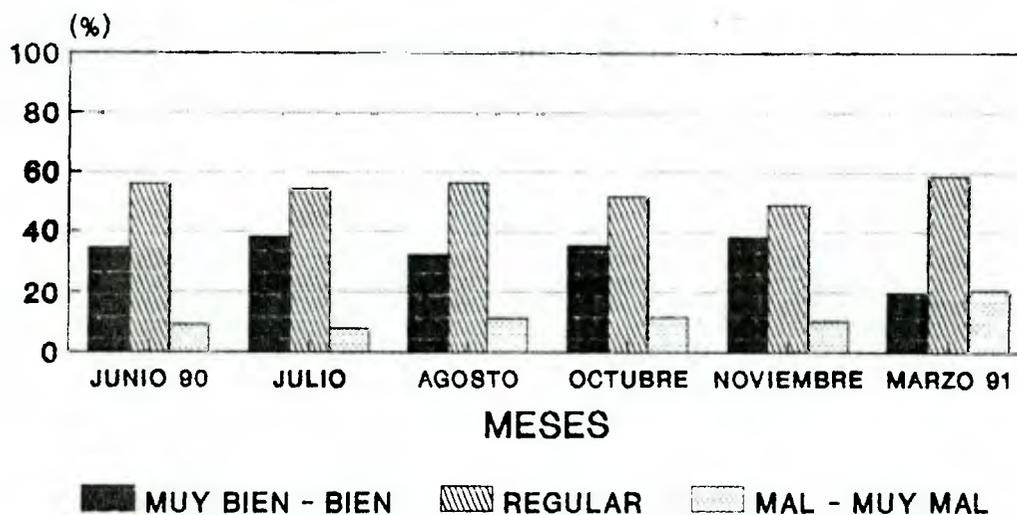
Div. de Estudios  
Secretaría Gral. de la Presidencia  
(TIME, Gran Santiago)

# OPINION RESPECTO A LA OCURRENCIA DEL TERRORISMO (MARZO 1991)



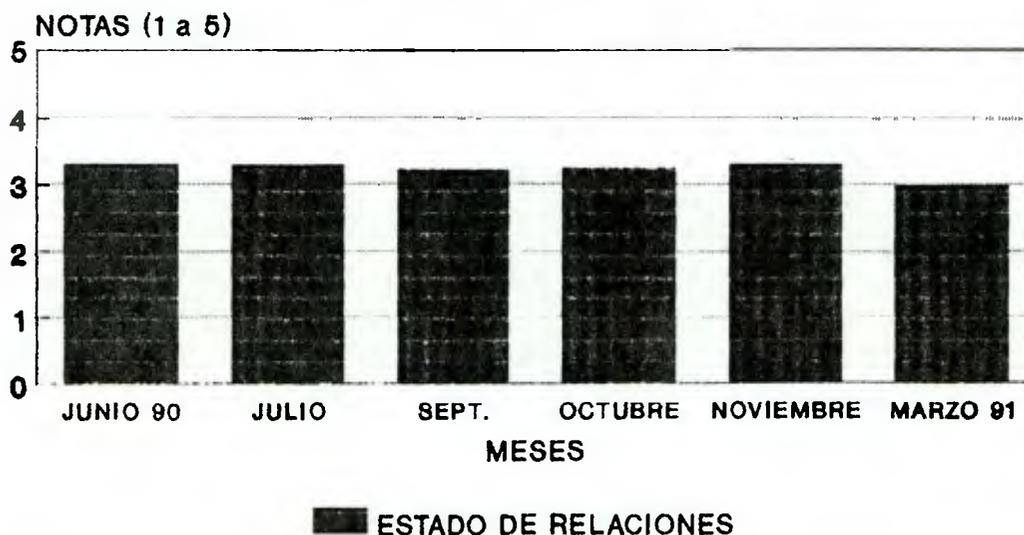
Div. de Estudios  
Secretaría Gral. de la Presidencia  
(TIME, Gran Santiago)

# ESTADO DE RELACIONES GOBIERNO - FUERZAS ARMADAS (JUNIO 1990 - MARZO 1991)



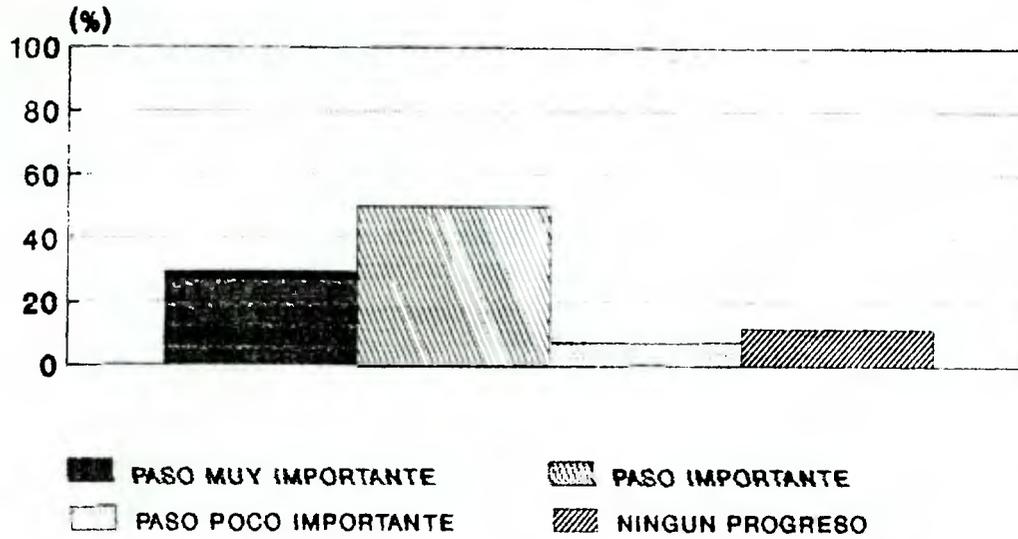
Div. de Estudios  
Secretaría Gral. de la Presidencia  
(SGG, para el Gran Santiago)

## NOTA A LAS RELACIONES DEL GOBIERNO Y LAS FUERZAS ARMADAS (MAYO 1990 - MARZO 1991)



Div. de Estudios  
Secretaría Gral. de la Presidencia  
(SGG, para el Gran Santiago)

# CONTRIBUCION DEL INFORME RETTIG A SOLUCION PROBLEMA DE DD.HH. (MARZO 1991)



Div. de Estudios  
Secretaría Gral. de la Presidencia  
(TIME, Gran Santiago)